

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

AÑO XCV PANAMÁ, R. DE PANAMÁ MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 1999

Nº23,911

CONTENIDO

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ALANJE
ACUERDO Nº 1

(De 07 de septiembre de 1999)

" POR MEDIO DEL CUAL, EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ALANJE, DEROGA EL ACUERDO Nº 28 DEL 25 DE MARZO DE 1999, QUE COBRA EL IMPUESTO A LA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA DE ALANJE, S.A., Y A SU VEZ REGLAMENTA EL MISMO." PAG. 1

CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SONA
ACUERDO MUNICIPAL Nº 9

(De 30 de julio de 1999)

" POR EL CUAL EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE SONA, APRUEBA Y DESIGNA A LA FUNDACION PAN DE LOS POBRES PARA QUE ADMINISTRE Y ORGANICE EL ALBERGUE DE LA CASA DEL CAMPESINO." PAG. 3

ACUERDO Nº 19

(De 30 de agosto de 1999)

" POR EL CUAL EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SONA, REGLAMENTA EL USO DE TERRENO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CATIVE." PAG. 4

CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RIO DE JESUS

ACUERDO MUNICIPAL Nº 6

(De 3 de septiembre de 1999)

" POR MEDIO DEL CUAL, SE ADICIONA NUEVO IMPUESTO AL REGIMEN IMPOSITIVO DEL DISTRITO DE RIO DE JESUS." PAG. 6

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ENTRADA Nº 793-99

FALLO DEL VEINTITRES DE MARZO DE 1999

" DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. CARLOS R. AYALA MONTERO, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS (CONATO)." PAG. 7

ENTRADA Nº 872-96A

FALLO DEL VEINTISEIS DE MARZO DE 1999

ACLARACION DE SENTENCIA

" DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID MEJIA, EN REPRESENTACION DE ERNESTO CHU JORDAN." PAG. 19

AVISOS Y EDICTOS

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ALANJE
ACUERDO Nº 1

(De 07 de septiembre de 1999)

Por medio del cual, el Consejo Municipal del distrito de Alanje, deroga el ACUERDO Nº 28 del 25 de marzo de 1999, que cobra el impuesto a la empresa Central Azucarera de Alanje, S.A. y a su vez reglamenta el mismo.

El Consejo Municipal del distrito de Alanje, en uso de sus facultades legales que le confiere la ley y por este medio:

GACETA OFICIAL**ORGANO DEL ESTADO**

Fundada por el Decreto de Gabinete Nº 10 del 11 de noviembre de 1903

DIRECTOR GENERAL

OFICINA
Avenida Norte (Elroy Alfaro) y Calle 3a. Casa Nº 3-12,
Edificio Casa Amarilla, San Felipe Ciudad de Panamá.
Teléfono 228-8631, 227-9833 Apartado Postal 2189
Panamá, República de Panamá
**LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS
PUBLICACIONES**
NUMERO SUELTO: B/.1.40

**LICDA. YEXENIA I. RUIZ
SUBDIRECTORA**

Dirección General de Ingresos
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES
Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00
Un año en la República B/.36.00
En el exterior 6 meses B/.18.00, más porte aéreo
Un año en el exterior, B/.36.00, más porte aéreo

Todo pago adelantado.

CONSIDERANDO

Que mediante el ACUERDO Nº28 del 25 de marzo de 1999, el municipio de Alanje, reclamó el cobro de impuestos a la empresa Central Azucarera de Alanje, S.A.

Que luego de hacer una revalorización de la situación financiera de la empresa, acordó reformar dicho impuesto.

Que en estudio pormenorizado del Consejo y la empresa, se ha considerado prudente derogar el ACUERDO Nº28 del 25 de marzo de 1999, y en su defecto a probar un impuesto a dicha empresa azucarera, que sea de la siguiente forma:

PRIMER AÑO la empresa paga al municipio \$30,000.00 de impuestos.
SEGUNDO AÑO la empresa paga al municipio \$30,000.00 de impuestos.
TERCER AÑO la empresa paga al municipio \$36,000.00 de impuestos.
A partir de 2002 se revisará dicho acuerdo para determinar la suma consona que esta empresa debe pagar en concepto de tributo.

Que la Ley 106 del 8 de octubre de 1973, reformada por la Ley 52 del 12 de diciembre de 1994, le otorga amplias facultades al Concejo Municipal, para reglamentar el cobro de los impuestos a las empresas que estén dentro de su jurisdicción.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la derogación del ACUERDO Nº28 del 25 de marzo de 1999.

ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el impuesto a cobrar a la empresa Central Azucarera de Alanje, S.A. de la siguiente manera:

01-ENERO-1999 al 31-DICIEMBRE-1999 pagará \$30,000.00

01-ENERO-2000 al 31-DICIEMBRE-2000 pagará \$30,000.00

01-ENERO-2001 al 31-DICIEMBRE-2001 pagará \$36,000.00

ARTICULO TERCERO: A partir del 2002, el Concejo realizará una revisión de impuesto a la Central Azucarera de Alanje, S.A., para determinar el mismo.

ARTICULO CUARTO: Este acuerdo empieza a regir a partir de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en el Concejo Municipal de Alanje, a los siete días (7) del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

ING. IVAN ROJAS
Presidente del
Concejo Municipal

DORIS A. ATENCIO
Secretaria

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ALANJE

Debidamente sancionado el Acuerdo Municipal No.1 del 07 de Septiembre de 1999, por el Señor Alcalde Municipal del Distrito, tal como lo establece el artículo 41, acápite 2 de la Ley No.106 del 8 de Octubre de 1974, acuerdo expedido por el Concejo Municipal.

Alanje, 9 de Septiembre de 1999.

JAVIER ENRIQUE CONTRERAS
Alcalde Municipal del
Distrito de Alanje

CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SONA
ACUERDO MUNICIPAL Nº 9
(De 30 de julio de 1999)

POR EL CUAL EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SONA, APRUEBA Y DESIGNA A LA FUNDACION PAN DE LOS POBRES PARA QUE ADMINISTRE Y ORGANICE EL ALBERGUE DE LA CASA DEL CAMPESINO.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SONA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Soná aprobó utilizar 1,200 mts² del terreno que ocupa el Hospital Ezequiel Abadía para la construcción de La Casa del Campesino.

- SEGUNDO:** Que el Gobierno Nacional a través de PROINLO aportó la partida de B/50,000.00 (cincuenta mil balboas) para la construcción de la Casa del Campesino.
- TERCERO:** Que el Municipio de Soná no cuenta con los recursos económicos para la administración y funcionamiento de dicho albergue.
- CUARTO:** Que la Fundación Pan de Los Pobres, Asociación que cuenta con Personería Jurídica sin fines de lucro, ha solicitado a través de su Presidenta, la Sra. Irene A. de Aguila, se le conceda la administración de dicho albergue.

A C U E R D A :

- PRIMERO:** Designar a la Fundación Pan de Los Pobres, sin fines de lucro administrar el albergue de la Casa del Campesino.
- SEGUNDO:** Que dicha fundación está autorizada para elaborar la reglamentación legal que regirá en el albergue Casa del Campesino.
- TERCERO:** Que la Fundación Pan de Los Pobres presentará un informe anual de las actividades de la Casa del Campesino, al Concejo Municipal de Soná.
- CUARTO:** Que dicha concesión se establece por un período de tres (3) años, a partir de su sanción, prorrogable a solicitud de la Fundación previa aprobación del Concejo Municipal.
- QUINTO:** Este Acuerdo Entrará a regir, a partir de su sanción y se ordena su publicación en la Gaceta Oficial. Fíjese en las tablillas correspondientes por términos de diez (10) días calendario.

Dado en el Honorable Consejo Municipal del Distrito de Soná, a los 30 días del mes de julio de 1999.

H.C. JUAN RODRIGUEZ
Presidente del Consejo
Municipal de Soná

GLADYS SANTAMARIA
Secretaria del Consejo
Municipal de Soná

DADO EN LA ALCALDIA DE SONA, FIRMADO HOY 30 DE JULIO DE 1999.

LILIANA AROSEMENA
Alcalde Municipal
Distrito de Soná

ROBERTO VELEZ
Secretario
Alcaldía

ACUERDO Nº 19
(De 30 de agosto de 1999)

POR EL CAUL EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SONA, REGLAMENTA EL USO DE TERRENO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CATIVE.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SONA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY,

C O N S I D E R A N D O :

- 1o. Que en los años 1972 a 1978, el Honorable Representante del corregimiento de Cativé compró un globo de terreno de 45 Has. aproximadamente, con recursos del Estado, de la partida (Capital semilla), asignada a la Junta Comunal.
- 2o. Que este terreno fue adquirido con el objetivo de responder a los problemas sociales de viviendas e incrementar programas didácticos de producción, que permitan mejorar las condiciones socio-económicas de la Comunidad.
- 3o. Que en la Administración de 1990 - 1994, el Honorable Representante donó a través de Reforma Agraria, un globo de terreno de 30 Has. a un grupo precooperativo y a la familia Sánchez y Mojica, quedando como patrimonio de la Junta Comunal, 15 Has. aproximadamente, para construcciones de viviendas y programas de producción, la cual se hace necesario reglamentar el uso del terreno según establece la Ley No.105.

RESUELVE:

ART. 1. Díctese el reglamento de uso del terreno de la Junta Comunal del corregimiento de Cativé.

PARAG. I: La Ley No.105 manifiesta que, es patrimonio de la Junta Comunal, todo lo que adquiriera en calidad de compra o donación, convirtiéndose en una garantía para cualquier transacción económica que así estime realizar, haciendo buen uso de los mismos, lo que amerita reglamentarlo.

En esta oportunidad, el objetivo primordial de las 15 Has. de terreno, es de responder a una acción social de servir en la concreción de lotes para viviendas y se convierta en una comunidad que tenga acceso a los programas del Gobierno Nacional.

ART. 2: El terreno de la Junta Comunal, asignado al programa de viviendas, serán divididos en pequeños lotes de 30 mts. de largo, por 30 mts. de ancho.

2.1. El beneficiario no podrá tener más de un lote, ni directa, ni indirectamente con las especificaciones antes mencionada.

2.2. Los lotes serán asignados a los beneficiarios en forma gratuita, previa nota de solicitud y ésta será evaluada en las Sesiones de la Junta Comunal y la misma será aprobada o negada a través de una Resolución que se le entregará al solicitante.

2.3. El beneficiario no podrá vender el terreno excepto las mejoras que realice dentro de sus previos.

2.4. Entendiéndose por mejoras, siembra de árboles frutales, maderables, cercas, construcciones y otros.

2.5. Si el beneficiario del lote abandona o fallece, el lote retorna a la Junta Comunal, con las mejoras realizadas, con excepción de construcciones permanentes (casa de bloque, cerca de metal).

LEGALIZACION DE LOTES

ART. 3. Para tramitarla compra de lotes, deberá presentar la solicitud por escrito y adjuntar los timbres que exige la Ley.

3.1. La segregación de lote le corresponde al interesado, previo informe de la Comisión que asigne la Junta Comunal.

3.2. Los lotes para trámites legales de título de propiedad tendrán un valor de B/.0.25 el metro cuadrado y B/0.50 el metro cuadrado por el exceso de tierra.

3.3. El beneficiario realizará los trámites de cancelación en las oficinas de la Tesorería de la Junta Comunal.

ART. 4. La Junta Comunal es la única entidad que puede exonerar, permutar, arrendar, donar y vender los lotes.

PARAG.II: Es potestad de la Junta Comunal, realizar reordenamientos de lotes, calles, para lograr el mejor uso del recurso tierra, no obviando lo que establece la Ley, que no se pueden vender las servidumbres, tales como: orillas de calles, de ríos y quebradas, callejones de conducciones a lotes, áreas verdes, parques, etc.

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Soná, a los 30 días del mes de agosto de 1999.

H.R. JUAN RODRIGUEZ
Presidente del Consejo
Municipal de Soná

GLADYS SANTAMARIA
Secretaria del Consejo
Municipal de Soná

GLADYS SANTAMARIA
Secretaria del Consejo
Municipal de Soná

CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RIO DE JESUS
ACUERDO MUNICIPAL Nº 6
(De 3 de septiembre de 1999)

POR MEDIO DEL CUAL, SE ADICIONA NUEVO IMPUESTO AL REGIMEN IMPOSITIVO DEL DISTRITO DE RIO DE JESUS.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RIO DE JESUS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y;

CONSIDERANDO:

- Que mediante Acuerdo Municipal No. 15 del 10 de Abril de 1995, promulgado en la Gaceta Oficial No. 22,871, el Lunes 18 de Septiembre de 1995, crea las reformas al Régimen que establece los Impuestos Municipales.
- Que se hace necesario adicionar nuevos impuestos cada vez que se instalen empresas en el Distrito y no esten registradas en el Régimen Impositivo.
- Que la Ley 106 de 1973, reformada por la Ley 52 de 1984, le da amplias facultades al Concejo Municipal para hacer las modificaciones al Régimen Impositivo que así se estimen convenientes.

ACUERDA :

ARTICULO PRIMERO: Adicionarse al Régimen Impositivo del Distrito de Río de Jesús, el cobro del impuesto que debe pagar la **COMPANIA CABLE AND WIRELESS**.

ARTICULO SEGUNDO: Los pagos serán de la siguiente forma:

- | | |
|---|-------------|
| 2.1. Línea de Teléfonos Comerciales.....B/. | 2.00 a 5.00 |
| 2.2. Teléfonos Públicos en Servidumbres Municipales | 10.00 |
| 2.3. Teléfonos Públicos en áreas privadas..... | 5.00 |

ARTICULO TERCERO: este Acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación.

Dado en el Concejo Municipal de Río de Jesús, a los Tres (13) días del mes de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

H.R. EDILBERTO VERGARA
Presidente del Concejo Municipal
de Río de Jesús

YARINETH GORDILLO
Secretaria del Concejo Municipal
de Río de Jesús

SANCIONADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999), POR:

LIC. HUMBERTO SANCHEZ O.
Alcalde Municipal

AMALIA SUAZO
Secretaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ENTRADA Nº 793-99
FALLO DEL VEINTITRES DE MARZO DE 1999

Entrada No. 793-99

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD formulada por el Lcdo. Carlos R. Ayala Montero, en representación del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), contra el numeral 4 del artículo 452 y párrafo del artículo 455 del Código de Trabajo, adicionados por la Ley 45 de 2 de julio de 1998.

MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA

REPUBLICA DE PANAMA
ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
P L E N O

Panamá, veintitres (23) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

V I S T O S:

El licenciado **CARLOS AYALA**, actuando en virtud de poder otorgado por el **CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS**

(CONATO), ha presentado acción de inconstitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 452 y el párrafo del artículo 455, ambos del Código de Trabajo, adicionados por la Ley 45 de 2 de julio de 1998.

Acogida la demanda y surtidos todos los trámites establecidos por ley para este tipo de procesos, entra el Pleno de la Corte a desatar la controversia constitucional.

I. DISPOSICIONES ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALES

La iniciativa procesal que nos ocupa plantea ante este Tribunal, la inconstitucionalidad del inciso final (identificado como numeral cuarto por el recurrente) del artículo 452 del Código de Trabajo, así como del párrafo del artículo 455 ibídem, adicionados por la Ley 45 de 1998.

Las normas referidas, en su partes censuradas, son del tenor siguiente:

"Artículo 452: Concluidos los procedimientos de conciliación, el conflicto colectivo será sometido total o parcialmente a arbitraje en cualesquiera de los siguientes casos:
1.....

3. Si el conflicto se produce en una empresa de servicio público, según la definición del artículo 486 de este Código. En este caso, la Dirección Regional o General de Trabajo decidirá someter la huelga a arbitraje, después que haya comenzado. Las parte podrán apelar la decisión ante el Ministro de Trabajo y Bienestar Social. El recurso de concederá en efecto devolutivo y será decidido sin intervención de las partes. La resolución que decida someter el conflicto a arbitraje, ordenará la inmediata suspensión de la huelga.

De igual manera a la señalada en el numeral anterior, se procederá en casos de huelga en empresa privada o de servicio público, si la Dirección General de Trabajo determinase que, por la duración de la huelga, se han deteriorado gravemente las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región o del país. La resolución que ordene someter a arbitraje el conflicto colectivo, debe ser debidamente motivado por la autoridad competente y podrá ser apelada ante el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral."

"Artículo 455. Si por cualquier causa no fuere posible designar los árbitros de las listas correspondientes, cada parte designará libremente un árbitro. Si vencido el plazo para designar el árbitro, cualquiera de las partes no lo hubiere hecho, la Dirección Regional de Trabajo escogerá al azar el árbitro de la lista correspondiente.

Los árbitros designados por las partes se reunirán y escogerán un tercer árbitro que actuará como Presidente del Tribunal de Arbitraje. Si no se pusieren de acuerdo dentro del día siguiente al que tomaron posesión de su cargo, el Director General de Trabajo designará el tercer árbitro, que podrá ser un funcionario del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social que no hubiere participado en la conciliación, o una persona idónea.

No es necesario que el tercer árbitro se escoja de las listas confeccionadas por la Dirección Regional o General de Trabajo.

Parágrafo: Cuando el arbitraje sea solicitado por el Estado, el árbitro que corresponda ser escogido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, deberá seleccionarse de una lista confeccionada con anticipación al inicio del conflicto colectivo."

II. CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Las normas constitucionales cuya violación aduce el postulante, son los artículos 65, 74, 75 de la Constitución Nacional, y los artículos 39 del Convenio No. 87 y 40 del Convenio No. 98, ambos de la Organización Internacional del Trabajo, que considera parte del bloque de la constitucionalidad.

El artículo 65 del Texto Fundamental reconoce el derecho a huelga y dispone que la Ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que ella determine.

Según expresa el actor, la violación de esta norma se produce en concepto de violación directa, porque el que los conflictos colectivos sean susceptibles de arbitraje obligatorio, excluye el libre ejercicio del derecho de huelga; que el arbitraje obligatorio no es una limitación sino la negación al ejercicio del derecho de huelga. Continúa expresando al

recurrente, que la decisión de someter el caso a arbitraje, en sustitución del libre ejercicio del derecho de huelga, es de carácter unipersonal, por lo que se aleja del principio protector del derecho del trabajo, puesto que una sola persona tiene la responsabilidad de determinar que una huelga ha deteriorado gravemente las condiciones socio-económicas de los trabajadores de una región o de todo el país."

El segundo cargo de violación recae sobre el artículo 74 de la Constitución Nacional, que consagra la justicia social en materia laboral, dispone que sobre esta base la Ley regula las relaciones entre capital y el trabajo, y fija una especial protección estatal en beneficio de los trabajadores.

Según el actor, el texto comentado se dice violado en concepto de violación directa por omisión, porque la protección de los derechos de los trabajadores es congruente con el derecho de huelga, y no es posible enunciar en la Carta Magna el interés del Estado de proteger a los trabajadores en la relación de trabajo, para caer en la incongruencia jurídica de promulgar una ley que restrinja precisamente uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, en favor de la parte empleadora.

El tercer cargo de infracción constitucional recae en el artículo 75 del Estatuto Fundamental, disposición que establece que los derechos y garantías establecidas en la Constitución serán consideradas como mínimo a favor de los trabajadores.

Expresa el actor, que la transgresión se produce en este caso, debido a que con la dictación de la Ley 45 de 1998 se desconocen las normas constitucionales que contienen derechos para el sector débil de la relación laboral, limitando el derecho a huelga, único medio de coacción que tienen los trabajadores para presionar una forma de negociación.

Finalmente, en cuanto a los Convenios No.87 y No.98 de la Organización Internacional del Trabajo que el actor considera integrados al bloque de la constitucionalidad, esta Superioridad se ve precisada a adelantar que el análisis de dichos cargos no será parte de la decisión que nos ocupa. Sólo el Pleno de la Corte podría incorporar dichos Convenios al bloque de la constitucionalidad, y ya en sentencia de 23 de mayo de 1991, al resolver la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 25 de 1990, esta Corporación Judicial descartó el introducir dichos Convenios al bloque, razón por la cual no es procedente examinar los dos cargos endilgados.

A continuación se reproducen para mayor ilustración, las partes pertinentes de la referida decisión:

"Si bien es cierto que los Convenios No.87 y No. 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Panamá, pueden ser aplicables a los empleados públicos en materia de libertad sindical, no es menos cierto que aún si, en gracia de discusión, se admitiera que la Ley 25 de 1990 se opone a ellos, la consecuencia jurídica que seguiría no sería la inconstitucionalidad de la Ley 25 sino la obligación del Gobierno de Panamá de adecuar su legislación interna a lo dispuesto en dichos convenios internacionales, tal como lo señalan éstos."

III. OPINION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración, funcionaria encargada de emitir concepto en relación a las imputaciones de la parte actora, comparece al proceso mediante Vista Fiscal No.465 de 30 de noviembre de 1998 visible a folios 14-27 del expediente, en la cual se manifiesta de acuerdo con la pretensión del demandante, y solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 45 de 1998.

Entre las motivaciones principales que sustentan la Vista Fiscal, la señora Procuradora ha esgrimido:

"En Panamá, el derecho de huelga ha sido expresamente previsto por la Constitución Política, la cual en su artículo 64 preceptúa que se reconoce el derecho de huelga, y a punto y seguido indica que la Ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los casos de los servicios públicos.

La Ley Nº45 de 2 de julio de 1998, básicamente estatuye el arbitraje obligatorio en casos de huelga en empresas privadas, si la Dirección General de Trabajo determina que, por la duración de la huelga, se han deteriorado gravemente las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región o del país. Esta norma claramente niega el ejercicio del derecho de huelga cuando impone el arbitraje obligatorio a las partes en un conflicto colectivo de trabajo, y por tanto la misma es contraria a la Constitución.

La huelga no es un derecho ilimitado en manos de los trabajadores, pero la norma legal atacada no se circunscribe a reglamentarla - v.g. estableciendo sus condiciones o señalando cuáles deben ser sus objetivos-, sino que, al ser por definición la huelga y el arbitraje obligatorio contradictorios y excluyentes uno del otro, de forma real niega la posibilidad de su ejercicio.

Solamente en caso de huelgas en los servicios públicos, en los que la Constitución permite restringir el ejercicio de este derecho, se puede establecer el arbitraje obligatorio a las partes inmersas en un conflicto colectivo económico, sobre esto existe amplio acuerdo en la doctrina.

En la situación puesta bajo el estudio y decisión del Honorable Tribunal, no se está restringiendo o limitando de forma nugatoria el ejercicio del derecho de huelga en un servicio público, como lo permite la carta Fundamental, sino en los casos que por la duración de la huelga en empresas privadas, se han deteriorado gravemente las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región o del país, lo que es manifiestamente contrario a lo dispuesto en la Constitución Política.

IV. ARGUMENTOS DE PARTES INTERESADAS

De acuerdo con el trámite procesal, luego de la última publicación del edicto a que hace referencia el artículo 2555 del Código Judicial, se abrió un término de diez

días hábiles para que todas las personas interesadas en el caso presentaran argumentos por escrito.

En esta etapa procesal se allega a la Corte, los alegatos finales del CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS (CONATO), en los que se insiste en la procedencia de declarar inconstitucionales los artículos de la Ley 45 de 1998.

V. DECISION DE LA CORTE

Conforme a nuestro Código de Trabajo, huelga es el abandono temporal del trabajo en una o más empresas, establecimientos o negocios, acordado y ejecutado por un grupo de cinco o más trabajadores (art. 475), y para que sea legal debe cumplir con los requisitos fijados por la ley.

En nuestro país, el derecho a huelga ostenta rango constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1941, con excepción de la huelga por solidaridad y la huelga en las empresas de servicios públicos, que se encontraba prohibida.

La Constitución social de 1946 (a. 68) eliminó la prohibición de huelga por solidaridad y sólo permitió limitaciones al ejercicio de la huelga en los servicios públicos que la Ley determinara. En este período, la Corte Suprema incluso declaró inconstitucional el artículo 321 del Código de Trabajo vigente a esa fecha, que prohibía la huelga en los servicios públicos (cfr. sentencia de 7 de marzo de 1950), al considerar que el legislador se había extralimitado al desarrollar legalmente el precepto constitucional, que en ningún momento prohibía la huelga; sólo establecía que la ley podía crear restricciones especiales en los casos de los servicios públicos que aquella determinara.

El artículo 65 de la actual Constitución Política, ha

establecido claramente el reconocimiento del derecho a huelga, y que la ley podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que ella determine.

Partiendo de este contexto la Corte ha de reiterar, que las referidas restricciones especiales no alcanzan a anular el derecho a huelga, ni se hacen extensibles a todos los servicios públicos. Se trata de limitaciones a su ejercicio sólo para las empresas que presten servicios públicos, en los casos que la ley determine.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 5 de diciembre de 1963, al abordar el tema de las limitaciones al derecho a huelga, señaló fundamentalmente lo siguiente:

"El ejercicio de derecho de huelga reconocido al obrero en el artículo 68 de la Constitución Nacional, se ha visto ya, no está sujeto a condición alguna. Su plenitud tiene como única limitación la que la ley determine en materia de servicios públicos.

.....
Por otra parte, si el derecho a huelga sólo aparece limitado en la Constitución en la forma que ya se ha explicado, el convenio que establece la parte final del artículo 336 del C. de Trabajo implica indudablemente, una disminución del mismo contrario a la declaración expresa, contenida en el artículo 70 de la Constitución Nacional."

Bajo esta premisa, y al avocarnos al análisis de los cargos presentados por la parte actora, esta Superioridad no puede menos que reconocer que la facultad conferida al Director General de Trabajo en el último inciso del artículo 452 del Código de Trabajo, conforme quedó modificado por la Ley 45 de 1998, en el sentido de que luego de una valoración unilateral de este funcionario sobre las supuestas consecuencias socioeconómicas para los habitantes de una región o del país por la duración de una huelga en la empresa privada,

pueda ordenar la suspensión de la misma para someter a arbitraje el conflicto colectivo, excede y afrenta el texto del artículo 65 de la Constitución Nacional.

En efecto, la apretada síntesis que se esboza en párrafos anteriores sobre la evolución constitucional que ha tenido en nuestro país el reconocimiento del derecho de huelga, nos indica con claridad que la tutela de este derecho, que hace parte de nuestra vida democrática, ha sido amplio, al punto de que desde temprano se apartó de las doctrinas tradicionales y generalizadas que impedían las huelgas de trabajadores de establecimientos dedicados a prestar servicios públicos, para en su lugar convenir una bien lograda fórmula constitucional que sin coartar el derecho de huelga, permitiera en beneficio colectivo, aplicar ciertas restricciones especiales en los servicios públicos que la ley determinara.

De esta forma, el Estado garantizaba que la huelga, similar a otras manifestaciones sociales de descontento, no fuese eliminada en detrimento de la lucha librada por la clase trabajadora desde el Siglo XIX para afianzar este derecho.

Históricamente, uno de los instrumentos más efectivos de la clase obrera para lograr sus cometidos -mejoramiento de sus condiciones de trabajo- es el derecho a huelga, y ningún valor o eficacia tendría la interrupción de labores como medida impositiva para alcanzar los objetivos deseados, si pudiese ser suspendida de manera unilateral por un funcionario del Ministerio de Trabajo, con base a sus apreciaciones sobre las consecuencias socioeconómicas de la duración de la huelga en la empresa privada. Este proceder redundaría principalmente en beneficio de la clase empleadora.

Ciertamente, aunque el origen o ratio de la ley en este aspecto parece bien intencionado, produce como resultado concreto el impedir el desarrollo y continuidad de la huelga

en la empresa privada, en los que radica su fortaleza: si la extensión y persistencia de la huelga son los elementos más efectivos para obtener la negociación y concretización de sus objetivos, la previsión legal de que precisamente por la duración de la huelga en la empresa privada y sus consecuencias se pueda ordenar su suspensión e imponerse el arbitraje obligatorio, desarticula el nervio motor de este instrumento de autodefensa.

Bajo este razonamiento, la parte empleadora podría fácilmente concluir que ninguna huelga tendría real efectividad, ni constituiría amenaza de cambio contra sus políticas laborales, porque una vez que sus consecuencias se hagan manifiestas en la empresa privada o en la comunidad, se ordenaría la suspensión de la huelga y el conflicto se resolvería de modo arbitral, lo que no podría asegurar la conquista de los objetivos que originaron la medida.

De esta forma se produce indefectiblemente el aniquilamiento del derecho constitucionalmente concedido, por lo que el texto legal examinado deviene inconstitucional, dado que conforme a nuestro Estatuto Fundamental no es dable la prohibición de la huelga en la empresa privada en ninguna rama de la actividad económica donde concurre capital y trabajo por razón de la duración de la misma y de sus consecuencias económicas, salvo las limitaciones para los servicios públicos, ya sea que éstos sean prestados por instituciones públicas o por empresas privadas. La Ley 45 se abrogó en este sentido, la facultad de introducir restricciones al derecho a huelga en la empresa privada que sólo la Constitución Nacional hubiese podido establecer como lo hace en materia de servicios públicos.

Evidentemente el problema no radica en la institución del arbitraje establecido en el artículo 452 del Código de Trabajo

como mecanismo para solucionar conflictos. El numeral 3º del artículo 452 del Código de Trabajo ya prevé el arbitraje para resolver los conflictos colectivos que se den en las empresas de servicios públicos.

Lo que hace que el acto normativo atacado sea censurable, es la imposición Estatal de llevar el arbitraje a un status compulsivo, dándole connotación de normatividad jurídica tanto para las empresas de servicio público como a las empresas privadas, produciéndose de manera manifiesta, la violación constitucional del artículo 65 en relación con los artículos 74 y 75 de la Constitución Nacional.

Es oportuno indicar en este punto, que si bien la parte final del artículo 452 del Código de Trabajo, en lo que respecta al arbitraje para las empresas de servicio público no parecería estar afectado del vicio comentado, puesto que como hemos visto las únicas limitantes al derecho a huelga que prevé la Constitución son precisamente para los servicios públicos, el ordinal 3º ya preceptúa la posibilidad de someter a arbitraje los conflictos colectivos de empresas de servicio público definidas en el artículo 486 del mismo Código, pero establecía un procedimiento distinto al del ordinal creado por la Ley 45 de 1998. Ello obedece fundamentalmente a que la intención de la Ley 45 era alcanzar a las empresas privadas, y para esto debía crear un procedimiento especial, por lo que se ve similarmente afectado por el vicio imputado.

Se advierte no obstante, que el párrafo añadido al artículo 455 del Código de Trabajo no tiene necesariamente aplicación sólo para el arbitraje solicitado por el Estado para los casos contenidos en el inciso final del artículo 452, y siendo que el actor no ha indicado cómo se produce la violación constitucional en este caso, lo procedente es rechazar el cargo endilgado en relación al párrafo añadido

al artículo 455 del Código de Trabajo.

Cuando se invoca la violación de un derecho fundamental de orden social, como lo es el derecho a huelga, la Corte debe ejercitar un cuidadoso escrutinio sobre la disposición censurada de inconstitucional, en vías de proteger efectivamente el derecho tutelado. En este caso, el examen realizado ha permitido concluir que la regulación introducida al Código de Trabajo por la Ley 45 de 1998 afronta los textos constitucionales examinados, al restringir el derecho a huelga y forzar a las partes de la relación laboral a someterse al proceso de arbitraje, lo que sería siempre obligatorio y excluyente de toda otra posibilidad, en perjuicio de la parte económicamente débil que el Estado se ha comprometido a proteger especialmente. Por ende, conforme a los razonamientos que acompañan esta decisión, lo procedente es acceder de manera parcial a la declaración solicitada.

En consecuencia, la Corte Suprema, **PLENO**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL** la frase "en empresa privada o", del inciso final del artículo 452 del Código de Trabajo, tal como quedó modificado por la Ley 45 de 1998, y **QUE NO ES INCONSTITUCIONAL** el párrafo del artículo 455 del Código de Trabajo añadido por la Ley 45 de 1998.

El inciso final del artículo 452 del Código de Trabajo, eliminada la frase "en empresa privada o", quedará así:

"De igual manera a la señalada en el numeral anterior, se procederá en casos de huelga de servicio público, si la Dirección General de Trabajo determinase que, por la duración de la huelga, se han deteriorado gravemente las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región o del país. La resolución que ordene someter a arbitraje el conflicto colectivo, debe ser debidamente motivada por la autoridad competente y podrá ser apelada ante el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral".

NOTIFIQUESE.

MGDO. EDGARDO MOLINO MOLA

MGDO. LUIS CERVANTES DIAZ

MGDO. JOSE A. TROYANO

MGDA. GRACIELA J. DIXON

MGDO. FABIAN A. ECHEVERS

MGDO. ROGELIO FABREGA ZARAK

MGDO. HUMBERTO A. COLLADO T.

MGDA. MIRTZA ANGELICA
FRANCESCHI DE AGUILERA

MGDO. ARTURO HOYOS

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ENTRADA N° 872-96A
FALLO DEL VEINTISEIS DE MARZO DE 1999
ACLARACION DE SENTENCIA

Entrada N° 872-96A

ACLARACION DE SENTENCIA

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado David Mejía, en representación de Ernesto Chu Jordán, contra el Decreto N° 34 del 9 de septiembre de 1996, dictada por el Tribunal Electoral.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLENO

Panamá, veintiseis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).-

V I S T O S:

La firma forense Moreno, Márquez & Preciado, en representación del señor JOSE AGUSTIN PRECIADO MIRO, presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia solicitud de aclaración de la Sentencia del 12 de junio de 1998, a través de la cual esta corporación de justicia declaró que SON

INCONSTITUCIONALES: la frase "esto es, nacidos antes de que los padres o el padre o madre panameños haya obtenido su cédula de identidad", contenida en el artículo 1; y el artículo 2, ambos del Decreto N° 34 del 9 de septiembre de 1996, dictado por el Tribunal Electoral.

La apoderada del actor pide aclaración de los siguientes puntos:

1. ¿Debe ser entendida la Sentencia de 12 de junio de 1998 en el sentido de que la única precondition para que una persona nacida en el extranjero, de padres también nacidos en el extranjero, pero éstos de padres panameños por nacimiento, sea la de que se siga una secuencia en el sentido de que sean inscritos, primero los padres nacidos en el extranjero y luego el hijo de dichos padres, también en el extranjero?

2. ¿Debe ser entendida la Sentencia de 12 de junio de 1998 en el sentido de que es panameño por nacimiento y por ende procede su inscripción como tal en el Registro Civil, una persona nacida en el extranjero de padres panameños nacidos en el extranjero cuando éstos (los padres) ya se han domiciliado en territorio Panameño y han sido inscritos en el Registro Civil panameños, pero con posterioridad al nacimiento del hijo nacido en el extranjero que solicita la inscripción?

La apoderada judicial del señor PRECIADO sustenta su petición en las siguientes afirmaciones:

1. Mediante la Sentencia del 12 de junio de 1998 la Corte expresó que la inscripción de una persona nacida en el extranjero, hija de padres panameños también nacidos en el extranjero, en calidad de "panameño nacido en el extranjero", sólo procede cuando estos últimos (los padres) han establecido previamente su domicilio en Panamá.

2. Sin embargo, la referida Sentencia no se pronuncia en cuanto al término dentro del cual deben darse estos supuestos, lo que sí hace el artículo 1° del Decreto N° 34 de 1996, cuando emplea la expresión "cuando aquellos hubieren nacido antes de que sus progenitores hubieran establecido su domicilio en Panamá".

3. Este término al que hace referencia el mencionado precepto reglamentario y sobre el cual no se ha pronunciado la

Corte, contradice el texto del artículo 9, numeral 2, de la Constitución Política "y hace ambigua la Sentencia: según la parte no declarada inconstitucional del Artículo Primero del Decreto 34 del 9 de septiembre de 1996, dictado por el Tribunal Electoral pareciera inferirse que se debe nacer después de que el o los progenitores panameños hayan establecido su domicilio en Panamá para tener derecho a la nacionalidad panameña, lo cual pareciera ir en contradicción con la Sentencia que nos ocupa, siendo que esta misma reconoce una única precondition (domiciliarse en Panamá) y nunca término alguno (haber nacido antes o después de dicha domiciliación) (fs. 112-115).

Al corrersele traslado de la solicitud del actor, el señor Procurador General de la Nación, mediante Vista Nº 21 del 28 de julio de 1998, se manifestó en desacuerdo con la petición del actor porque, a su juicio, lo que éste pretende es "replantear los términos de su impugnación del acto dictado por el Tribunal Electoral y, con ello, reabrir el debate constitucional que originó su pretensión de inconstitucionalidad, actitud que no se compadece con el mecanismo que contempla el artículo 2559 del Código Judicial" (fs. 117-121).

De acuerdo con el citado precepto, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, el demandante o el Ministerio Público "podrán pedir la aclaración de puntos oscuros de la parte resolutive o pronunciamiento sobre puntos omitidos".

En el presente caso, el Pleno coincide con la opinión del señor Procurador General de la Nación porque los dos puntos sobre los cuales el actor pide aclaración fueron considerados en la Sentencia del 12 de junio de 1998, en la cual se indicó

que el artículo 1º del Decreto N° 34 del 9 de septiembre de 1996 "parte del hecho de que, tanto el hijo cuya inscripción se pretende, como sus padres panameños han nacido en el extranjero, por lo cual se requiere que éstos últimos"... (o sea los padres) "...establezcan su domicilio en el territorio de la República de Panamá, para que, habiendo adquirido la calidad de panameños por nacimiento nacidos en el exterior, puedan entonces inscribir como tales a sus hijos nacidos en el extranjero" (Cfr. f. 103). Tal razonamiento tiene fundamento en el numeral 2º del artículo 9 de la Constitución Política, que exige que los hijos de padre o madre panameños por nacimiento nacidos fuera del territorio de la República, establezcan su domicilio en el territorio nacional para adquirir la nacionalidad panameña por nacimiento.

De ello se desprende que el requisito o la condición que establece el citado numeral 2º del artículo 9 ibidem, relativo a la fijación del domicilio de los padres en la República de Panamá, debe cumplirse antes de que se produzca el nacimiento de su hijo también nacido en el extranjero, pues, de lo contrario, éste sería hijo de padres extranjeros.

Es importante recordarle a la apoderada judicial de quien pide la aclaración, que el citado numeral 2º ibidem alude a uno de las tres formas como puede adquirirse la nacionalidad panameña "por nacimiento", la cual se determina en el momento del nacimiento de la persona, tal como indicó el Pleno de la Corte en su Sentencia del 24 de marzo de 1995 (Cfr. Reg. Jud. págs. 134-136).

Por las razones anotadas, el Pleno estima que debe rechazar la petición de la actora.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

NIEGA la solicitud de aclaración de la Sentencia del 12 de junio de 1998.

NOTIFÍQUESE Y PUBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

ARTURO HOYOS

EDGARDO MOLINO MOLA

LUIS CERVANTES DÍAZ

JUAN A. TEJADA MORA

GRACIELA J. DIXON

FABIÁN A. ECHEVERS

ROGELIO A. FÁBREGA

HUMBERTO A. COLLADO

CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

AVISOS

AVISO
En el cumplimiento con el Artículo 777, del Código de Comercio, el señor **RICAUURTE OCTAVIO VIDAL CANO**, con cédula 7-60-833, cancela por venta la Licencia Comercial Tipo "B", Registró 7-18065- concedida mediante

Resolución N-988 de 23 de junio de 1989. La cual pasa al señor **DARINEL AUGUSTO PERALTA GOMEZ**, varón, mayor de edad, panameño, portador de la cédula 7-92-1528, **RICAUURTE O VIDAL C.**
Ced. 7-60-833
L-459-095-74
Segunda publicación

AVISO
En el cumplimiento con el Artículo 777 del Código de Comercio, la señora **LAURA JOSEFA CONTEVERGARA**, con cédula 8-9037, cancela la Licencia Tipo B, Numero 37688 que traspasa a

CARLOS MORALES, varón, mayor de edad, panameño, portador de la cédula 8-362-622.
L-459-148-70
Primera publicación

AVISO
Mediante Escritura Publica N° 10,732 de 5 de

octubre de 1999, de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, registrada a Ficha 300598, Documento 34114, inscrita el día 11 de octubre de 1999, ha sido disuelta la sociedad **NOMANER, S.A.**
L-459-159-57
Única publicación

PROCESO DE IMPUGNACION

PROCESO DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD
La suscrita secretaria del Juzgado Segundo de Circuito del Segundo

Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil, por este medio, certifica:
Que el día de hoy, se presentó el Proceso

IMPUGNACION DE PATERNIDAD interpuesto por **AGRIPINO TORO LOZANO** en contra de **LISSETE QUINTERO**

SUAREZ y ENRIQUE DOMINGUEZ. Esta certificación se extiende para dar cumplimiento al Art. 658 del Código Judicial.

San Miguelito, 16 de junio de 1999.
Lcdo. MARIA FORERO
Secretaria Judicial
L-459-120-98
Única publicación

EDICTOS AGRARIOS

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
DEPARTAMENTO
DE REFORMA
AGRARIA
EDICTO Nº 274-DRA-
99

El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la
Reforma Agraria, en la
Provincia de Panamá, al
público:

HACE SABER:

Que **EDILBERTA CASTILLO DE GARCIA**, vecino de Cerro Viento, Distrito de San Miguelito, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-101-147, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-186-90, la adjudicación a título oneroso de 2 Globos parcelas de terreno baldíos ubicadas en el Corregimiento de Cacao, Distrito de Capira, de esta Provincia que se describen a continuación:
Parcela Nº 1: Demarcada en el plano Nº 82-07-9966 con una Superficie de 1 Has 7149 58 M2.
NORTE: Río Trinidad.
SUR: Camino de 12.00 mts. a Cacao y hacia Lidice.
ESTE: Terreno de Edilberto Castillo de Garcia.
OESTE: Callejón de 5 mts.
Parcela Nº 2: Demarcada en el plano Nº 82-07-9966 con una Superficie de 2 Has 4094 95 M2.
NORTE: Terreno de Benjamin Delgado y servidumbre a otros lotes de 3.00 mts.
SUR: Camino de 10.00

Mts. a Lidice y hacia Aguacate Nº 1 y Trinidad.
ESTE: Servidumbre de 3.00 Mts. a otros lotes y hacia Aguacate y Quebrada Aguacate.
OESTE: Río Trinidad.
Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Capira o en la Corregiduría de Cacao y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Panamá, a los 28 días del mes de septiembre de 1999.
MATILDE STANZIOLA
Secretaria Ad-Hoc
ING. ISAAC MARES
C.I. 2374 87
Funcionario
Sustanciador
L-459-151-35
Única Publicación

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
DEPARTAMENTO
DE REFORMA
AGRARIA
EDICTO Nº 273-DRA-
99

El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la
Reforma Agraria, en la
Provincia de Panamá, al
público:

HACE SABER:

Que **EDILBERTA CASTILLO DE GARCIA**, vecino de Cerro Viento, Distrito de San Miguelito, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-101-147,

ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-174-86 la adjudicación a título oneroso de 3 Globos parcelas de terreno baldíos ubicadas en el Corregimiento de Cacao, Distrito de Capira, de esta Provincia que se describen a continuación:
Parcela Nº 1: Demarcada en el plano Nº 82-07-8536 con una Superficie de 4 Has 6472 04 M2.

NORTE: Camino a Cacao y hacia Lidice de 15 mts. de ancho.
SUR: Terreno de Nemecio Garibaldi y Cementerio.
ESTE: Callejón de 5 metros que conduce a otros lotes.
OESTE: Servidumbre de 5 metros.
Parcela Nº 2: Demarcada en el plano Nº 82-07-8536 con una Superficie de 7 Has 3091 96 M2.
NORTE: Camino a Cacao y hacia Lidice de 15 metros de ancho.
SUR: Terreno de Nemecio Garibaldi y Cementerio.
ESTE: Servidumbre de 5 metros.
OESTE: Río Trinidad.
Parcela Nº 3: Demarcada en el plano Nº 82-07-8536 con una Superficie de 2 Has 0441 43 M2.
NORTE: Camino a Cacao y hacia Lidice de 15 metros de ancho.
SUR: Terreno de Nemecio Garibaldi.
ESTE: Río Trinidad.
OESTE: Callejón que conduce hacia otros lotes de 5 metros.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Capira o

en la Corregiduría de Cacao y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Panamá, a los 28 días del mes de septiembre de 1999.
MATILDE STANZIOLA
Secretaria Ad-Hoc
ING. ISAAC MARES
C.I. 2374 87
Funcionario
Sustanciador
L-459-151-01
Única Publicación

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
REGION Nº 5
PANAMA OESTE
EDICTO Nº 277-DRA-
99

El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la
Dirección Nacional
Reforma Agraria, en la
Provincia de Panamá, al
público:

HACE SABER:

Que el señor (a) **EDILBERTA CASTILLO DE GARCIA**, vecino (a) de Cerro Viento, Corregimiento de San Miguelito, Distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-101-147, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-143-87, según plano aprobado Nº 82-07-8652, la adjudicación a título oneroso de una

parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 0 Has 5276 64 M2, ubicada en Trinidad Arriba, corregimiento de El Cacao, Distrito de Capira, Provincia de Panamá, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Río Trinidad.
SUR: Camino de 12.00 mts. a El Cacao y hacia Lidice.
ESTE: Río Trinidad.
OESTE: Terreno de Edilberto Castillo de Garcia.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Capira o en la Corregiduría de El Cacao y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Capira, a los 28 días del mes de septiembre de 1999.

MATILDE STANZIOLA
Secretaria Ad-Hoc
ING. ISAAC MARES
C.I. 2374 87
Funcionario
Sustanciador
L-459-151-19
Única Publicación

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
REGION Nº 5
PANAMA OESTE
EDICTO Nº 276-DRA-
99

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la Provincia de Panamá, al público:

HACE SABER:

Que el señor (a) **EDILBERTA CASTILLO DE GARCIA**, vecino (a) de Cerro Viento, Corregimiento de San Miguelito, Distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-101-147, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-093-87, según plano aprobado Nº 62-07-9964, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 17 Has 1116.157 M2, ubicada en Trinidad Arriba, corregimiento de El Cacao, Distrito de Capira, Provincia de Panamá, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Terreno de Andres Martínez, Servidumbre de 5.00 Mts. a Cacao, Quebrada de Viejo y Arobienes, S.A.

SUR: Terreno de Jose S. Alveo.

ESTE: Terreno de Fernando García Flores, Eduardo Rodríguez y Servidumbre de 5 Mts. OESTE: Servidumbre de 5 mts. a Cacao y Quebrada del Viejo

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Capira, o en la Corregiduría de El Cacao y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir

de la última publicación. Dado en Capira, a los 28 días del mes de septiembre de 1999.

MATILDE STANZIOLA

Secretaria Ad-Hoc
ING. ISAAC MARES

C.I. 2374 87

Funcionario

Sustanciador

L-459-151-27

Única Publicación

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
REGION Nº 7-
CHEPO

EDICTO Nº 8-7-178--
99

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Reforma Agraria, en la Provincia de Panamá, al público:

HACE SABER:

Que el señor (a) **PLACIDO CHACON GONZALEZ GLOBO 1, CAMILO CHACON GONZALEZ GLOBO 2, MANUEL AMADOR CHACON GONZALEZ GLOBO 3**, vecino (a) de Uvive del corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal Nº 8-223-249, 8-335-362 y 8-352-417, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-059-95, según plano aprobado Nº 807-17-13861, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie de (Globo 1) 20 Has + 9,401.6746 M2., (Globo 2) 20 Has + 7,599.7511 M2. y (Globo 3) 20 Has + 4,709.9519 M2., que forma parte de la finca 2173 inscrita al Tomo 43 Folio 112 de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El terreno está ubicado en la localidad de La Estancia, corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, comprendido dentro de los siguientes linderos:

Globo 1 Superficie 20 Has + 9,401.6746 M2.

NORTE: Camilo Chacón González.

SUR: Dorico Díaz.

ESTE: Lino Domínguez

OESTE: Camino de 10.00 mts.

Globo 2 Superficie de 20 Has + 7,599.7511 M2.

NORTE: Manuel Amador Chacón González.

SUR: Plácido Chacón.

ESTE: Lino Domínguez.

OESTE: Camino.

Globo 3 Superficie de 20 Has + 4,709.9519 M2.

NORTE: Camino, Dorico Díaz y Plácido Chacón.

SUR: Camilo Chacón González.

ESTE: Lino Domínguez.

OESTE: Camino.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Panamá o en la Corregiduría de Pacora y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Chepo a los 12 días del mes de octubre de 1999.

SRA. RUTH MILLARES

Secretaria Ad-Hoc

ING. MIGUEL

VALLEJOS R.

Funcionario

Sustanciador

L-459-159-15

Única Publicación

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO

AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
REGION Nº 7-
CHEPO

EDICTO Nº 8-7-180-99
El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Reforma Agraria, en la Provincia de Panamá, al público:

HACE SABER:

Que el señor (a) **ONESIMO COBA, SIMON TRINIDAD COBA MUÑOZ, ONESIMO COBA MUÑOZ, MARIA ROSA COBA DE GONZALEZ, MARTA ESTELA COBA MUÑOZ, DIOGENES COBA MUÑOZ, EMMA MUÑOZ CABALLERO**, vecino (a) de 24 de Diciembre del corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal Nº 4-61-617, 4-137-731, 4-139-321, 4-160-629, 4-251-111, 4-262-474, 4-83-783 ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-328-95, según plano aprobado Nº 808-17-14007, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie de 0 Has + 0,263.7744 M2., que forma parte de la finca 89004, inscrita al Rollo 1771 Doc. 3 de propiedad del Ministerio de Desarrollo

Agropecuario. El terreno está ubicado en la localidad de 24 de Diciembre, corregimiento de Pacora, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Militza García.

SUR: C.I.A.

OESTE: Vereda de 4.00 mts.

OESTE: Alberto Mejía con Quebrada sin de por

medio.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Panamá o en la Corregiduría de Pacora y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Chepo, a los 15 días del mes de octubre de 1999.

SRA. RUTH MILLARES

Secretaria Ad-Hoc

ING. MIGUEL

VALLEJOS R.

Funcionario

Sustanciador

L-459-165-21

Única Publicación

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA
REGION Nº 9
BOCAS DEL TORO
EDICTO Nº 1-174-99

El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la Provincia de Bocas del Toro, al público:

HACE SABER:

Que el señor (a) **CANDIDO JAVIER SERRANO M.** vecino (a) del corregimiento de Changuinola, Distrito de Changuinola, portador de la cédula de identidad personal Nº 1-25-2545, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 1-302, la adjudicación a título de compra, de una parcela de terreno que forma parte de la Finca 129, inscrita al Tomo 13, Folio 72 y de propiedad

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de un área superficial de 6 Has + 0.440.00 M²., ubicado en el corregimiento de Changuinola, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, comprendido dentro de los siguientes linderos NORTE: Calle, SUR: Angel Orocu, ESTE: José Atención Chávez, OESTE: Idalides Santamaría.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en el de la Corregiduría de Changuinola y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Chepo, a los 5 días del mes de octubre de 1999

MARIA ELENA RODRIGUEZ
Secretaria Ad-Hoc

Funcionario
Sustanciador
L-026585
Única Publicación

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
REGION Nº 6, COLON
EDICTO Nº 3-174-99
El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la Provincia de Colon, al publico:

HACE SABER:
Que el señor JAIRO FORESTAS DE PALENOQUE, S.A. Representante Legal:

JORGE ALFREDO ALEGRE JURADO, vecino (a) de San Francisco, del corregimiento de San Francisco Distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal Nº PE-4-745 na solicitada a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 3-98-96, según plano aprobado Nº 300-14-3350, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie de 2 Has + 257'1 58 Mts 2., que forma parte de la finca 3183 inscrita al Tomo 60 Folio 210 de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El terreno está ubicado en la localidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, Distrito de Colon, Provincia de Colon, comprendido dentro de los siguientes linderos NORTE: Camino, SUR: Edwin Cano, ESTE: Camino Edwin Cano.

OESTE: Isaias Batista

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Colon en la Corregiduría de Santa Rosa y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Buena Vista a los 15 días del mes de octubre de 1999

SOLEDAD MARTINEZ CASTRO
Secretaria Ad-Hoc
MIGUEL A. VERGARA SUORE
Funcionario Sustanciador

L-459-160-84
Única Publicación

DIRECCION DE INGENIERIA MUNICIPAL
DE LA CHORRERA
SECCION DE CATASTRO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA
EDICTO Nº 219
El suscrito Alcalde del Distrito de La Chorrera, HACE SABER:

Que el señor (a) JORGE ABDIEL DUARTE MENDOZA, panameño, mayor de edad, unido, Oficio Conductor, con residencia en Parcelación Altos de la Gloria, Casa Nº 8448, portador de la cédula de Identidad Personal Nº 9-98-160 en su propio nombre o representación de su propia persona, ha solicitado a este despacho que se le adjudique a Título de Plena Propiedad, en concepto de venta un lote de Terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado Calle Servidumbre que conduce a la Calle Benítez de la Barriada Altos de La Gloria, corregimiento El Coco, donde se llevara a cabo una construcción distinguida con el número 1111 y cuyos linderos y medidas son los siguientes:

NORTE: Resto de la Finca 6028 Tomo 194, Folio 104, propiedad del Municipio de La Chorrera con 24.00 Mts.
SUR: Resto de la Finca 6028, Tomo 194, Folio 104, propiedad del Municipio de La Chorrera con 24.00 Mts.
ESTE: Servidumbre con 18.00 Mts.
OESTE: Resto de la Finca 6028 Tomo 194, Folio 104, propiedad del Municipio de La Chorrera con 18.00 Mts.

Area total del terreno: cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados (432.00 Mts. 2).

Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo Municipal Nº 11 del 6 de marzo de 1969, se fija el presente Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (10) días para que dentro de dicho plazo o término puedan oponerse la (s) persona (s) que se encuentran afectadas.

Entreguesele sendas copias del presente Edicto al interesado para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta Oficial La Chorrera, 16 de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

El Alcalde (Fdo.) SRA. LIBERTAD BRENDA DE ICAZA A
Jefe de la Sección de Catastro

(Fdo.) SRA. CORALIA B. DE ITURRALDE
Es fiel copia de su original La Chorrera, dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

SRA. CORALIA B. DE ITURRALDE
Jefe de la Sección de Catastro Municipal
L-459-110-84
Única publicación

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
REGION Nº 8, LOS SANTOS
EDICTO Nº 176-99

El Suscrito Funcionario Sustanciador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, Region

8, en la Provincia de Los Santos, al publico:
HACE SABER:

Que, PAULO EDUARDO DUCASA CEDEÑO, vecino (a) del corregimiento de Cabecera, Distrito de Las Tablas, y con cédula de identidad personal Nº 7-115-660 ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Reforma Agraria, Region 8, Los Santos, mediante solicitud Nº 7-335-98, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra estatal adjudicable, de una superficie de 56 Has + 3243.63 M²., en el plano Nº — ubicado en La Pintada, Corregimiento de El Cortezo, Distrito de Tonosi, Provincia de Los Santos, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Terreno de Vicente González
SUR: Terreno de Salvador Ducasa Espino, servidumbre de paso y quebrada Salcupuedes.
ESTE: Terreno de Rosa Cárdenas, Silverio Batista y Quebrada Salcupuedes.
OESTE: Terreno de Vicente González, Quebrada Pata del Mono y terreno de Vicente González.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Tonosi o en la Corregiduría de El Cortezo y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Las Tablas a los 22 días del mes de septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIAR
Secretaria Ad-Hoc
ING. ERICA BALLESTEROS
Funcionario Sustanciador

L-457-837-32
Única Publicación

REPÚBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION NACIONAL
DE
REFORMA AGRARIA
REGION Nº 8 - LOS
SANTOS

EDICTO Nº 160-99

El Suscrito Funcionario
Sustanciador del Ministerio
de Desarrollo
Agropecuario,
Departamento de Reforma
Agraria, Región 8, en la
Provincia de Los Santos, al
público:

HACE SABER:

Que, **OLGA ELIDIA DIAZ DE PEREZ**, vecino (a) del corregimiento de Guánico, Distrito de Tonosí, y con cédula de identidad personal Nº 7-93-349, ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Reforma Agraria, Región 8, Los Santos, mediante solicitud Nº 7-076-99, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra estatal adjudicable, de una superficie de 6 Has + 2029.20 M2., en el plano Nº 707-08-7129, ubicado en Ave. María, Corregimiento de Guánico, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Terreno de Herman Bolívar González.

SUR: Terreno de Hernán Bolívar González.

ESTE: Camino de rodadura de tosca.

OESTE: Río Guánico.

Para los efectos legales se

figa este Edicto en lugar

visible de este despacho

en la Alcaldía del Distrito

de Tonosí o en la

Corregiduría de Guánico

y copias del mismo se

entregarán al interesado

para que los haga publicar

en los órganos de

publicación correspondientes, tal como

lo ordena el artículo 108 del

Código Agrario. Este

Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Las Tablas a los 22 días del mes de septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIÁ R.

Secretaria Ad-Hoc

ING. ERIC A.

BALLESTEROS

Funcionario Sustanciador
L-457-837-32
Única Publicación

REPÚBLICA DE

PANAMA

MINISTERIO DE

DESARROLLO

AGROPECUARIO

DEPARTAMENTO DE

REFORMA AGRARIA

REGION Nº 8 - LOS

SANTOS

EDICTO Nº 160-99

El Suscrito Funcionario
Sustanciador del
Ministerio de Desarrollo
Agropecuario,
Departamento de
Reforma Agraria, Región
8, en la Provincia de Los
Santos, al público:

HACE SABER:

Que, **POLOMIO DE LEÓN SARRAMEA**

vecino (a) del

corregimiento de La Cruz

de Guánico, Distrito de

Tonosí, y con cédula de

identidad personal Nº 4-57-684, ha solicitado al

Ministerio de Desarrollo

Agropecuario de

Reforma Agraria, Región

8, Los Santos, mediante

solicitud Nº 7-211-98, la

adjudicación a título

oneroso de una parcela

de tierra estatal

adjudicable, de una

superficie de 6 Has +

6593.26 M2., en el plano

Nº 703-06-7063 ubicado

en La Rabana,

Corregimiento de Las

Cruces, Distrito de Los

Santos, Provincia de Los

Santos, comprendido

dentro de los siguientes

linderos:

NORTE: Terreno de

Castro Gutiérrez.

SUR: Terreno de

Tomas De León y

servidumbre.

ESTE: Terreno de

Edwiges De León de

Martínez.

Para los efectos legales se

figa este Edicto en lugar

visible de este despacho

en la Alcaldía del Distrito

de Tonosí o en la

Corregiduría de Guánico

y copias del mismo se

entregarán al interesado

para que los haga publicar

en los órganos de

publicación correspondientes, tal como

lo ordena el artículo 108 del

Código Agrario. Este

Edicto tendrá una vigencia

de quince (15) días a partir

de la última publicación.

Dado en Las Tablas a los

22 días del mes de

septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIÁ R.

Secretaria Ad-Hoc

ING. ERIC A.

BALLESTEROS

Funcionario Sustanciador

L-457-837-32

Única Publicación

de tierra estatal

adjudicable, de una

superficie de 8 Has +

9.129.26 M2., en el plano

Nº 702-09-6962 ubicado

en Jobo Dulce,

Corregimiento de Llano

Largo, Distrito de Los

Santos, Provincia de Los

Santos, comprendido

dentro de los siguientes

linderos:

NORTE: Camino de San

Agustín a Villa de Los

Santos.

SUR: Terreno de Saul

Vasquez, Silvestra Seth y

Concepción Carvajal.

ESTE: Camino que

conduce de Jobo Dulce a

Villa de Los Santos.

OESTE: Terreno de Fidel

De León.

Para los efectos legales

se figa este Edicto en lugar

visible de este despacho

en la Alcaldía del Distrito

de Los Santos o en la

Corregiduría de Las

Cruces y copias del

mismo se entregarán al

interesado para que los

haga publicar en los

órganos de publicidad

correspondientes, tal

como lo ordena el artículo

108 del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una

vigencia de quince (15)

días a partir de la última

publicación.

Dado en Las Tablas a los

22 días del mes de

septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIÁ R.

Secretaria Ad-Hoc

ING. ERIC

BALLESTEROS

Funcionario Sustanciador

L-458-034-19

Única Publicación R

Agraria, Región 8, en la
Provincia de Los Santos, al
público:

HACE SABER:

Que, **IDILIO ANTONIO**

MONTENEGRO

CEDEÑO, vecino (a) del

corregimiento de El Cocal,

Distrito de Las Tablas, y

con cédula de identidad

personal Nº 7-54-978, ha

solicitado al Ministerio de

Desarrollo Agropecuario

de Reforma Agraria,

Región 8, Los Santos,

mediante solicitud Nº 7-

345-98, la adjudicación a

título oneroso de una

parcela de tierra estatal

adjudicable, de una

superficie de 50 Has +

3946.79 M2., en el plano

Nº 702-24-7076 ubicado

en Los Naranjos,

Corregimiento de

Valleriquito, Distrito de Las

Tablas, Provincia de Los

Santos, comprendido

dentro de los siguientes

linderos:

NORTE: Terreno de José

del Carmen Domínguez,

Elia Chanis, Camilo

Domínguez.

SUR: Terreno de Licimaco

A. Montenegro y

servidumbre.

ESTE: Terreno de Liberato

Montenegro, Italo

Montenegro, Quebrada El

Junco terreno de Ricaurte

Montenegro y Belisario

González.

OESTE: Terreno de

Saturnino Cárdenas y

Edgar E. Díaz.

ING. ERIC
BALLESTEROS
Funcionario Sustanciador
L-457-746-44
Única Publicación: R

REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE
REFORMA AGRARIA
REGION N° 8 - LOS
SANTOS
EDICTO N° 174-99

El Suscrito Funcionario Sustanciador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Reforma Agraria, Región 8, en la Provincia de Los Santos, al público:

HACE SABER
Que, **ERIC YOVANY GUTIERREZ VILLARREAL**, vecino (a) del corregimiento de Las Guabas, Distrito de Los Santos, y con cédula de identidad personal N° 6-80-724, ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Reforma Agraria, Región 8, Los Santos, mediante solicitud N° 7-028-99, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra estatal adjudicable de una superficie de 4 Has + 9901.48 M², en el plano N° 703-06-7097 ubicado en El Chato Corregimiento de Las Guabas, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos, comprendido dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Camino que va de San Luis a Villa Lourdes
SUR: Terreno de Francisco Cortes
ESTE: Terreno de Francisco Cortes
OESTE: Terreno de Escobastica Villanar.
Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Los Santos o en la Corregiduría de Las Guabas y copias del mismo se entregarán al

interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Las Tablas a los 22 días del mes de septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIAR
Secretaria Ad-Hoc
ING. ERIC
BALLESTEROS
Funcionario Sustanciador
L-457-787-61
Única Publicación: R

REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE
REFORMA AGRARIA
REGION N° 8 - LOS
SANTOS
EDICTO N° 170-99

El Suscrito Funcionario Sustanciador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Reforma Agraria, Región 8, en la Provincia de Los Santos, al público:

HACE SABER
Que, **IRMA MAGDALYS ANDRADE GUERRA**, vecino (a) del corregimiento de Tablas Abajo, Distrito de Las Tablas, y con cédula de identidad personal N° 4-138-867, ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Reforma Agraria, Región 8, Los Santos, mediante solicitud N° 7-033-99, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra estatal adjudicable de una superficie de 9 Has + 1815.84 M², en el plano N° 702-01-7115 ubicado en Las Tablas Abajo, Corregimiento de Tablas Abajo, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, comprendido dentro de los siguientes linderos:
NORTE: Terreno de Benito Bolívar Castillo

SUR: Camino que va de Las Tablas Abajo a Las Tablas.

ESTE: Camino que va de Las Tablas Abajo a Las Tablas.
OESTE: Terreno de Leticia Castillo.
Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Las Tablas o en la Corregiduría de Tablas Abajo y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Las Tablas a los 22 días del mes de septiembre de 1999.
IRIS E. ANRIAR
Secretaria Ad-Hoc
ING. ERIC
BALLESTEROS
Funcionario Sustanciador
L-458-115-35
Única Publicación: R

REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE
REFORMA AGRARIA
REGION N° 8 - LOS
SANTOS
EDICTO N° 189-99

El Suscrito Funcionario Sustanciador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Reforma Agraria, Región 8, en la Provincia de Los Santos, al público:

HACE SABER
Que, **REINA ISABEL TORRES ZAMBRANO Y OTRO**, vecino (a) del corregimiento de El Manantial, Distrito de Las Tablas, y con cédula de identidad personal N° 7-89-1914, ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Reforma Agraria, Región 8, Los Santos, mediante solicitud

N° 7-046-99, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra estatal adjudicable de una superficie de 5 Has + 0136.98 M², en el plano N° 702-06-7106 ubicado en El Coco, Corregimiento de El Manantial, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, comprendido dentro de los siguientes linderos:
NORTE: Terreno de Climaco Almanza.
SUR: Terreno de Cefarino Zambrano.
ESTE: Línea de Altas Mareas.

OESTE: Callejón que conduce a Boca La Laja a fincas vecinas.
Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Las Tablas o en la Corregiduría de El Manantial y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Las Tablas a los 22 días del mes de septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIAR
Secretaria Ad-Hoc
ING. ERIC
BALLESTEROS
Funcionario Sustanciador
L-458-620-65
Única Publicación: R

REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO DE
REFORMA AGRARIA
REGION N° 8 - LOS
SANTOS
EDICTO N° 161-99

El Suscrito Funcionario Sustanciador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Departamento de Reforma Agraria, Región 8, en la Provincia de Los Santos, al

público:

HACE SABER:

Que, **PACIFICO VASQUEZ**, vecino (a) del corregimiento de Llano Largo, Distrito de Los Santos, y con cédula de identidad personal N° 7-12-881, ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Reforma Agraria, Región 8, Los Santos, mediante solicitud N° 7-219-98, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra estatal adjudicable de una superficie de 6 Has + 0770.93 M², en el plano N° 702-02-6946 ubicado en el Corregimiento de Llano Largo, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos, comprendido dentro de los siguientes linderos:
NORTE: Terreno de Pacífico Vásquez Vasquez, Remigio Osorio.
SUR: Terreno de Remigio Osorio.

ESTE: Terreno de Blas Pedro Castillo, Eustiquio Chanis, Gustavo Sáez y Amado Pérez.
OESTE: Terreno de Laureano Vasquez.
Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este despacho en la Alcaldía del Distrito de Los Santos o en la Corregiduría de Llano Largo y copias del mismo se entregarán al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Las Tablas a los 22 días del mes de septiembre de 1999.

IRIS E. ANRIAR
Secretaria Ad-Hoc
ING. ERIC
BALLESTEROS
Funcionario Sustanciador
L-457-669-42
Única Publicación: R